



Asamblea General

Distr. general
10 de septiembre de 2019
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 85º período de sesiones (12 a 16 de agosto de 2019)

Opinión núm. 44/2019 relativa a Nguyễn Văn Hoá (Viet Nam)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 33/30.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el 20 de marzo de 2019 el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno de Viet Nam una comunicación relativa a Nguyễn Văn Hoá. El Gobierno respondió a la comunicación el 20 de junio de 2019. Viet Nam es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, los inmigrantes y los refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de revisión administrativa o judicial o recurso (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Nguyễn Văn Hoá es un ciudadano vietnamita de 24 años. Antes de su detención, trabajaba como periodista, bloguero, activista ambiental e instructor de seguridad informática, y colaboraba regularmente con Radio Free Asia. Habitualmente reside en la provincia de Hà Tĩnh (Viet Nam).

Información básica

5. En abril de 2016, Viet Nam sufrió uno de los peores desastres ambientales de su historia, que tuvo como consecuencia la mortandad de peces y la ruina de las comunidades de pescadores situadas a lo largo de 200 kilómetros de la región costera central. Se estima que cientos de personas se intoxicaron por comer peces envenenados. Posteriormente, la muerte de los peces se vinculó a un derrame tóxico provocado por una nueva planta siderúrgica de propiedad de una empresa con sede en la Provincia China de Taiwán, Formosa Hà Tĩnh Steel Corporation, que al parecer desechó cianuro y otros productos químicos en sus desagües cloacales. El apoyo del Gobierno a la planta y su falta de reacción ante el desastre dieron lugar a protestas generalizadas. El Gobierno respondió a la crisis con una fuerte represión de las protestas, durante la cual muchos activistas fueron detenidos.

6. La fuente informa de que el Sr. Hoá, oriundo de Quảng Ích, una aldea de la comuna de Xã Kỳ Khang, distrito de Kỳ Anh, provincia de Hà Tĩnh, una de las zonas más gravemente afectadas por el derrame de sustancias tóxicas, cubrió la historia del desastre y las consiguientes protestas. Durante la crisis, el Sr. Hoá difundió vídeos que había filmado en el transcurso de las protestas y que posteriormente fueron publicados por los medios de comunicación. También prestó asistencia a las familias perjudicadas por el desastre, entre otras formas ayudando a pescadores afectados a obtener una indemnización y reclamar justicia en el ámbito del medio ambiente. La fuente alega que, poco después de que su cobertura de las protestas se reprodujera en medios internacionales y mientras se encontraba trabajando para Radio Free Asia en Hà Tĩnh, el 19 de noviembre de 2016 el Sr. Hoá fue golpeado por agentes policiales que le confiscaron su equipo, incluido su teléfono móvil. Temiendo más represalias, el Sr. Hoá pasó entonces a la clandestinidad.

Detención, reclusión y juicio

7. La fuente informa de que, el 11 de enero de 2017, el Sr. Hoá fue detenido en la provincia de Hà Tĩnh, al parecer sin que se le entregara, en ese momento, una orden de detención o una orden de ingreso en prisión. Su familia no fue informada de la detención y lo buscó durante días. El 17 de enero, sus familiares dirigieron sendas cartas a los Departamentos de Policía de Kỳ Anh y Xã Kỳ Khang en las que les comunicaban que el Sr. Hoá había desaparecido ocho días antes y les pedían que investigaran su desaparición.

8. Según la fuente, el 23 de enero, la Policía informó a la familia que el Sr. Hoá había sido “detenido temporalmente” en virtud del artículo 258 del Código Penal de Viet Nam por “abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones y ciudadanos”, que se castiga con una pena máxima de siete años de cárcel. A la familia no se le permitió visitar al Sr. Hoá, quien estuvo detenido en régimen de incomunicación en el centro de detención de Hà Tĩnh durante aproximadamente dos meses. La fuente afirma que la Policía recomendó al Sr. Hoá no nombrar un abogado. La familia no tuvo acceso al expediente de la causa.

9. En abril de 2017, el Director Adjunto de la Policía de Hà Tĩnh anunció públicamente las acusaciones contra el Sr. Hoá. Según el escrito de acusación, el Sr. Hoá había creado cuentas en múltiples redes sociales para difamar al partido y para desacreditar y desprestigiar al Gobierno, distorsionar información sobre el Gobierno e incitar a las personas en su contra. Ese mismo mes, las autoridades de Viet Nam emitieron un vídeo del Sr. Hoá en el que “se disculpaba” por su cobertura de las protestas, en un evidente intento de disuadir a la población de participar en actividades cívicas pacíficas. La fuente alega que el Sr. Hoá no redactó el texto del vídeo, ya que las palabras de la confesión son casi un calco de las utilizadas en las grabaciones en vídeo de las confesiones de otros activistas.

10. El 7 de junio de 2017, el Departamento de Policía de Hà Tĩnh cambió oficialmente la acusación por la de “realizar actividades de propaganda contra la República Socialista de Viet Nam”, con arreglo al artículo 88 del Código Penal, delito que se castiga con una pena máxima de 20 años de cárcel.

11. El juicio del Sr. Hoá tuvo lugar el 27 de noviembre de 2017 y duró dos horas y media. El Sr. Hoá no estuvo representado por un abogado y, dado que no había sido informada acerca del juicio, su familia no asistió. Fue declarado culpable de “realizar actividades de propaganda contra el Estado”, con arreglo al artículo 88 del Código Penal, y condenado a siete años de cárcel, seguidos de tres años de arresto domiciliario. No recurrió la sentencia. En febrero de 2018, el Sr. Hoá fue trasladado al centro de reclusión de An Diem en el distrito de Đại Lộc, provincia de Quang Nam, lugar que dista unos 500 kilómetros de su ciudad de origen y donde se encuentra detenido actualmente.

12. Si bien la detención del Sr. Hoá no se produjo inmediatamente después de que él informara sobre el desastre de Formosa, fue parte de un conjunto más amplio de medidas de represión de las autoridades de Viet Nam encaminadas a sofocar nuevas protestas y disturbios sociales tras el desastre¹. La fuente recuerda que varios titulares de mandatos de los procedimientos especiales criticaron la detención del Sr. Hoá y pidieron su liberación².

Condiciones de detención

13. La fuente recuerda que, durante los dos meses, aproximadamente, en los que el Sr. Hoá estuvo incomunicado, no se le permitió tener contacto con su familia ni con un abogado. Con posterioridad, fue autorizado a recibir visitas de su familia, pero estos derechos siguieron siendo limitados en la práctica. La familia del Sr. Hoá lo visitó solo cuatro veces desde su detención, ya que los centros de detención están lejos de su ciudad de origen, el viaje es costoso y su madre no goza de buena salud. Según la fuente, el Sr. Hoá no está autorizado a hablar de las condiciones de reclusión ni de su salud. Además, solo puede hablar con su familia por teléfono una vez al mes durante cinco minutos. La detención en régimen de incomunicación durante un período prolongado es propicia para la tortura y puede constituir tortura en sí misma, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Viet Nam ratificó en febrero de 2015.

14. La fuente alega que el Sr. Hoá sufrió graves abusos durante su reclusión; por ejemplo, se lo obligó a declarar contra el activista ambiental Lê Đình Lượng, quien fue condenado a 20 años de cárcel. Durante el juicio, el Sr. Hoá se retractó ante el juez y afirmó que su declaración había sido obtenida bajo tortura. Según la fuente, al regresar al centro de detención, el Sr. Hoá recibió palizas brutales en represalia por su testimonio. También se lo presionó para que cooperara en casos que no guardaban relación con el suyo, amenazándolo con enjuiciarlo si se negaba.

15. La fuente informa de que la salud del Sr. Hoá sigue siendo motivo de preocupación y que él no está recibiendo la medicación y el tratamiento adecuados. El Sr. Hoá fue operado de un tumor en una pierna y, desde entonces, su salud se ha deteriorado. Desde el 22 de febrero de 2019 el Sr. Hoá mantiene una huelga de hambre para protestar contra la negativa de las autoridades penitenciarias a permitirle recurrir su detención, los malos tratos sufridos durante la detención y el uso arbitrario de las normas y los reglamentos en su contra.

¹ Se refiere a los casos de los blogueros Nguyễn Văn Oai y Trần Thị Nga, quienes fueron detenidos pocos días después del Sr. Hoá. En octubre de 2016, una destacada defensora de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente conocida como “Madre Hongo” (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) fue detenida bajo la acusación de difundir propaganda en línea contra el Gobierno y fue condenada a 10 años de prisión. Su apelación fue rechazada en noviembre de 2017. La Sra. Nga y la Sra. Quỳnh fueron objeto de las opiniones núm. 75/2017 y núm. 27/2017, respectivamente.

² Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “Viet Nam: UN rights experts urge release of activists jailed for protesting toxic spill”, (Viet Nam: Expertos de las Naciones Unidas en derechos instan a la liberación de los activistas encarcelados por protestar por el derrame de sustancias tóxicas), 23 de febrero de 2018.

Información recibida

16. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Hoá es arbitraria y se inscribe en las categorías II y III.

Privación de la libertad como consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión

17. En relación con la categoría II, la fuente sostiene que el Sr. Hoá fue detenido, recluso y condenado para castigarlo por ejercer sus derechos en virtud del artículo 19 del Pacto, silenciarlo durante su reclusión y disuadir a otros de manifestar su oposición al Estado. El Sr. Hoá está recluso a causa de sus denuncias y su activismo respecto de los desastres de Formosa, lo que constituye una injerencia en su derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19.

18. La fuente recuerda que el artículo 19, párrafo 3, del Pacto establece que las restricciones impuestas al derecho a la libertad de expresión deben cumplir tres requisitos: estar “expresamente fijadas por la ley”, estar concebidas para conseguir un objetivo legítimo y cumplir los criterios de necesidad y proporcionalidad³. La fuente sostiene que la detención, la reclusión y la condena del Sr. Hoá no satisfacían estos requisitos.

19. La fuente alega que la detención, la reclusión y la condena del Sr. Hoá no estaban “fijadas por la ley”. Para que una disposición legislativa pueda ser calificada de “ley” en el sentido del artículo 19, párrafo 3, del Pacto, debe estar formulada con precisión suficiente para que las personas puedan regular su conducta de conformidad con ella. Además, no puede conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión⁴. La detención y la reclusión del Sr. Hoá se basaron en los artículos 88 y 258 del Código Penal de Viet Nam, que son excesivamente amplios y no permiten a los particulares regular su conducta.

20. Además, una restricción solo se podrá imponer para alcanzar uno de los objetivos especificados en el artículo 19, párrafo 3, a saber, el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que no se puede hacer valer el citado párrafo 3 como justificación para silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos humanos. Tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19, en circunstancia alguna, los atentados contra una persona, con inclusión de formas tales como la detención arbitraria⁵. La detención y la reclusión del Sr. Hoá estuvieron encaminados a limitar su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y no persiguieron un objetivo legítimo.

21. De conformidad con el artículo 19, párrafo 3, toda restricción debe ser necesaria y proporcionada para alcanzar los objetivos declarados y debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan desempeñar su función protectora⁶. El Comité de Derechos Humanos ha subrayado que la forma de expresión es pertinente para evaluar si una restricción es proporcionada⁷. En el párrafo 5 p) i) de su resolución 12/16, el Consejo de Derechos Humanos sostuvo que determinados tipos de expresión nunca deberían ser objeto de restricciones, entre ellos la discusión de políticas del Gobierno y el debate político; la información sobre los derechos humanos, las actividades del Gobierno y la corrupción en el Gobierno; la participación en campañas electorales, manifestaciones pacíficas o actividades políticas, especialmente a favor de la paz y la democracia, y la expresión de opiniones o discrepancias, ideas religiosas o creencias, entre otros, por miembros de minorías o de grupos vulnerables⁸. El Sr. Hoá fue arrestado y detenido por informar sobre el desastre de Formosa y las protestas posteriores contra el Gobierno. Habida cuenta de la gravedad del

³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 22.

⁴ *Ibid.*, párr. 25. Véase también A/HRC/14/23, párr. 79 d).

⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 23.

⁶ *Ibid.*, párr. 34. Véase también A/HRC/14/23, párr. 79 g) iv).

⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 34.

⁸ A/HRC/14/23, párr. 81 i).

desastre, las protestas que se sucedieron y la respuesta del Gobierno son cuestiones de interés público. No es necesario ni proporcionado en una sociedad democrática encarcelar a un bloguero por cubrir esas cuestiones.

Privación de la libertad como consecuencia del ejercicio del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

22. La fuente sostiene que el Sr. Hoá fue detenido y encarcelado por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos previsto en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto. Según definió el Comité de Derechos Humanos, los ciudadanos hacen efectiva esa participación, entre otras formas, ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y mediante su capacidad para organizarse⁹. No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social¹⁰. Únicamente está permitido imponer restricciones objetivas y razonables a este derecho. El Sr. Hoá fue detenido y encarcelado a causa de su participación en actuaciones relativas a cuestiones ambientales y en asuntos políticos como militante, bloguero y ciudadano videoperiodista. Esas restricciones no son objetivas ni razonables.

Derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial

23. En relación con la categoría III, la fuente recuerda que el artículo 14, párrafo 1, del Pacto establece el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad del tribunal mencionado en el artículo 14, párrafo 1, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. Todos los juicios en casos penales deben, en principio, llevarse a cabo oral y públicamente, lo que asegura la transparencia de las actuaciones y constituye una importante salvaguardia para la persona y la sociedad en general. Los tribunales deben facilitar al público información acerca de la fecha y el lugar de la vista y disponer medios adecuados para la asistencia de los miembros interesados del público, dentro de límites razonables, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el posible interés público por el caso y la duración de la vista¹¹.

24. El Sr. Hoá no fue oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente. Según la fuente, Viet Nam ha sido objeto de numerosas críticas por su incumplimiento de las garantías procesales y de las normas básicas relativas al juicio imparcial. El juicio del Sr. Hoá tuvo todas las características de una farsa judicial. Su familia no pudo asistir al juicio, ya que no se le notificó al respecto, y el juicio duró apenas dos horas y media, pese a la gravedad de la acusación contra el Sr. Hoá y de la condena que se le impuso.

Derechos a la igualdad ante los tribunales, a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa y a comunicarse con un abogado sin restricción alguna

25. La fuente recuerda que el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, establece que todas las personas son iguales ante los tribunales. Este derecho garantiza la igualdad de medios procesales, lo que significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento, salvo que la ley prevea distinciones y estas puedan justificarse con causas objetivas y razonables, sin que comporten ninguna desventaja efectiva u otra injusticia para el procesado. Según el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto, las garantías de que debe gozar una persona para que un juicio sea justo consisten, entre otras,

⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996) sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párr. 8.

¹⁰ *Ibid.*, párr. 3. Véanse también los artículos 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¹¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 28.

en disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, y en comunicarse con un defensor de su elección. La fuente se refiere a los principios 15 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, así como el artículo 7 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, en el cual se establece que el acceso a un abogado se facilitará dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención.

26. El Sr. Hoá estuvo incomunicado durante aproximadamente dos meses y presuntamente la Policía le recomendó que no nombrara un abogado. No pudo consultar a un abogado inmediatamente después de su detención, durante la investigación ni mientras duró su prolongada prisión preventiva, para preparar su juicio y para recibir asesoramiento sobre la interposición de un recurso de apelación. No dispuso del tiempo ni de los medios adecuados para preparar su defensa y comunicarse con un defensor de su elección. El Tribunal no respetó el derecho del Sr. Hoá a la igualdad de medios procesales, al llevar adelante su juicio en la situación fundamentalmente desigual en la que el Sr. Hoá, un bloguero de 24 años sin formación jurídica, se enfrentó a una acusación muy grave y a una reclusión prolongada sin representación letrada.

Derecho a comunicarse con el mundo exterior

27. La fuente recuerda que el Conjunto de Principios establece que la comunicación con el mundo exterior, en particular con los miembros de la familia, no se negará por más de algunos días (principio 15) y que la persona detenida o presa tendrá derecho a recibir visitas y comunicarse con sus familiares, y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior (principio 19).

28. El Sr. Hoá permaneció en prisión preventiva en régimen de incomunicación durante aproximadamente dos meses. Tras su condena, fue trasladado a una cárcel situada muy lejos de su ciudad de origen, hecho que, en la práctica, ha constituido un impedimento para que su familia lo visitara periódicamente. Durante las visitas, no fue posible al Sr. Hoá hablar con franqueza acerca de su caso, su salud o las condiciones de su reclusión, lo que menoscabó su oportunidad de ejercer su derecho a un juicio justo.

Respuesta del Gobierno

29. El 20 de marzo de 2019, mediante su procedimiento ordinario de comunicaciones, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno y le pidió que, antes del 20 de mayo de 2019, proporcionara información detallada acerca de la situación del Sr. Hoá. También solicitó al Gobierno que aclarara las disposiciones legales que justifican la detención, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a garantizar la integridad física y mental del Sr. Hoá.

30. El 16 de mayo el Gobierno solicitó una prórroga del plazo fijado para la respuesta. La prórroga fue concedida y se fijó como nueva fecha límite el 20 de junio de 2019. El Gobierno presentó su respuesta el 20 de junio de 2019.

31. En su respuesta, el Gobierno niega las alegaciones de la fuente y señala que la detención y el juicio del Sr. Hoá tuvieron fundamento jurídico y se realizaron conforme a derecho. La decisión de iniciar un proceso penal contra el Sr. Hoá, la orden de ingreso en prisión y la decisión de prorrogar el período de detención tuvieron origen en las autoridades competentes y fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de la provincia de Hà Tĩnh. Durante la investigación, el procesamiento y el juicio, los derechos del Sr. Hoá estuvieron plenamente garantizados, como lo exige la ley.

32. En Viet Nam, nadie es procesado por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que está protegido por el artículo 25 de la Constitución de Viet Nam de 2013, aunque tal ejercicio debe ajustarse a la ley. El artículo 19, párrafo 3, del Pacto dispone que el ejercicio de este derecho implica deberes y responsabilidades y puede estar sujeto a las restricciones que sean necesarias para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas y para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El artículo 88 del Código Penal no prohíbe el ejercicio del derecho a la libertad de

expresión y es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Viet Nam es parte, incluido el Pacto.

33. El Gobierno confirma que el Sr. Hoá residía en la provincia de Hà Tĩnh e informa que fue detenido el 11 de enero de 2017, y juzgado y condenado a siete años de cárcel y tres años bajo la supervisión obligatoria del Tribunal Popular de la provincia de Hà Nam por “realizar actividades de propaganda contra el Estado”. El Sr. Hoá fue trasladado al centro de reclusión de An Diem el 5 de febrero de 2018.

34. El 11 de enero de 2017 el Sr. Hoá se entregó voluntariamente y presentó una carta de confesión al Organismo de Seguridad e Investigación de la policía de la provincia de Hà Tĩnh. El Gobierno alega que el Sr. Hoá, consciente de la ilegalidad de sus actos, expresó el deseo de escribir una carta de confesión en la que describió todos ellos con el fin de solicitar la indulgencia de la ley. El Organismo de Seguridad e Investigación levantó un acta de la reunión con el Sr. Hoá, donde consta que recibió la carta de confesión, le tomó declaración y verificó la información suministrada. Según la carta, entre 2013 y 2017 el Sr. Hoá creó, registró y utilizó cuentas en medios sociales para conectarse e intercambiar información con Lê Đình Lượng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hoàng Đức Bình y otros¹². En una red social, compartió mensajes, vídeos e imágenes que distorsionaban la verdad, incitaban a alterar el orden público, convocaban a reuniones ilegales y difamaban a las autoridades.

35. Entre abril de 2016 y enero de 2017, el Sr. Hoá aprovechó el incidente ambiental ocurrido en las provincias centrales de Viet Nam para reunir información y grabar vídeos sobre reuniones de personas en la zona afectada. Difundió la información en los medios sociales con el propósito de incitar a la alteración del orden público y tergiversar la información sobre las políticas del Estado. El Ministerio de Información y Comunicaciones examinó los documentos creados por el Sr. Hoá y llegó a la conclusión de que contenían información distorsionada que difamaba al Gobierno, propagaba el odio y la violencia, causaba confusión entre la población y sembraba dudas sobre el Estado, a la vez que alimentaba la insatisfacción con él.

36. Sobre la base de las declaraciones del Sr. Hoá y la verificación inicial de los hechos, se consideró que sus actos eran constitutivos del delito de “abuso de las libertades y los derechos democráticos para vulnerar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones y ciudadanos”. El Organismo de Seguridad e Investigación dictó una decisión sobre la detención temporal del Sr. Hoá por tres días a partir del 11 de enero de 2017 para continuar investigando sus infracciones. El 14 de enero dictó una decisión acerca de la primera prórroga de la detención del Sr. Hoá por tres días, que fue aprobada por la Fiscalía Popular de la provincia de Hà Tĩnh. El 17 de enero dictó una decisión sobre la segunda prórroga de tres días, que también contó con la aprobación de la misma Fiscalía.

37. El 20 de enero el Organismo de Seguridad e Investigación decidió entablar una acción penal contra el Sr. Hoá y detenerlo durante tres meses para investigar los cargos imputados en su contra en virtud del artículo 258 del Código Penal. Ambas decisiones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de la provincia de Hà Tĩnh. Tras la investigación, se consideró que los actos del Sr. Hoá constituían “actividades de propaganda contra el Estado” con arreglo al artículo 88 del Código Penal. El Organismo de Seguridad e Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Hà Tĩnh decidió entonces iniciar acciones penales contra el Sr. Hoá por “realizar actividades de propaganda contra el Estado”, decisión que fue aprobada por la Fiscalía Popular de la provincia Hà Tĩnh y sustituyó a la decisión anterior.

Acceso a un abogado y notificación a los familiares acerca del juicio

38. En la reunión con la Policía celebrada el 11 de enero de 2017, el agente policial a cargo explicó al Sr. Hoá todos sus derechos y obligaciones, incluido el derecho a asistencia letrada. El Sr. Hoá se rehusó a contratar un abogado y escribió una carta en la que declaraba que no deseaba que su madre ni ningún otro familiar contrataran un abogado defensor, que

¹² El Sr. Binh fue objeto de la opinión núm. 45/2018.

sabía perfectamente que había infringido la ley y que creía tener la capacidad y los conocimientos jurídicos suficientes como para defenderse a sí mismo. El 21 de enero escribió una nueva carta en la que solicitaba que no se contratara a ningún abogado para que lo defendiera o representara gratuitamente.

39. El 3 de febrero, tras ser notificado de que un bufete había solicitado al Organismo de Seguridad e Investigación que certificara a un abogado defensor para representarlo, el Sr. Hoá escribió otra carta en la que manifestó que no había contratado ni pedido asesoramiento jurídico y que rechazaba cualquier representación legal.

40. El 13 de febrero, después de ser informado de que miembros del bufete habían solicitado reunirse con él en persona, el Sr. Hoá redactó una nueva carta donde pedía que no se contratara ni designara un abogado para representarlo gratuitamente.

41. El 8 de junio el Sr. Hoá escribió una carta en la que se indica lo siguiente: “Durante la fase de instrucción, voy a confesar honestamente todos los actos ilícitos que he cometido y, por lo tanto, no voy a contratar ni pedir asistencia jurídica para mi defensa y voy a rechazar a cualquier abogado contratado o solicitado por mi familia para que me represente. Voy a defenderme personalmente por los actos que he cometido. No acepto ningún abogado”. De conformidad con los artículos 49, párrafo 2 e), y 57, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal y con el artículo 27, párrafo 4 a), de la Ley de la Abogacía de 2012, los organismos que llevaban adelante las actuaciones penales contra el Sr. Hoá no tenían motivos para expedir un certificado de abogado defensor a ningún abogado que quisiera representarlo ni para organizarle una reunión con un abogado.

42. El 27 de noviembre el Tribunal Popular de la provincia de Hà Tĩnh conoció de la causa del Sr. Hoá. Un gran número de personas, entre ellas representantes de los medios de comunicación, asistió a la audiencia e informó sobre ella. Se invitó a la hermana mayor y al primo menor del Sr. Hoá, como familiares, a estar presentes en el juicio. Cuando se le preguntó, en el tribunal, acerca de la cuestión del abogado defensor, el Sr. Hoá respondió lo siguiente: “Reconozco que he infringido la ley y me considero con la capacidad y los conocimientos jurídicos suficientes como para representarme y defenderme; por lo tanto, rechazo los servicios de cualquier abogado”.

Condiciones de detención

43. Según el Gobierno, el Sr. Hoá nunca fue sometido a tortura ni a malos tratos durante su detención. Ha recibido el tratamiento estándar que exige la ley en relación con el alojamiento, la vestimenta, las comidas y las actividades diarias, en particular en calidad de detenido, acusado y condenado. Recibe visitas de familiares y tiene permitido comunicarse con ellos telefónicamente. Asimismo, recibe tratamiento médico. Entre el 5 de febrero de 2018 y mayo de 2019, el Sr. Hoá se reunió con miembros de su familia en diez ocasiones. El Gobierno facilitó una lista de las visitas de familiares, las llamadas telefónicas, el envío de cartas y la recepción de paquetes del Sr. Hoá en 2018 y 2019.

44. El Gobierno señala que, tras el traslado al centro de reclusión de An Diem, al Sr. Hoá se le diagnosticó un tumor en el muslo izquierdo. El 19 de octubre de 2018 fue enviado al hospital, donde se le practicó una cirugía, y actualmente se encuentra en buen estado de salud. Desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo de 2019, el Sr. Hoá se negó a recibir las comidas proporcionadas por el centro de detención y consumió los alimentos que compraba en la cantina y le enviaba su familia.

Comentarios adicionales de la fuente

45. La afirmación del Gobierno de que en Viet Nam nadie es detenido, recluido y enjuiciado por ejercer su derecho a la libertad de expresión es incorrecta. La fuente señala las opiniones del Grupo de Trabajo que documentan el enjuiciamiento de personas que lo han ejercido. Del mismo modo, la fuente rechaza la idea de que la detención y la reclusión del Sr. Hoá se ajustaron a derecho. La caracterización de las actividades del Sr. Hoá presentada por el Gobierno equivale a admitir que él está preso por su cobertura del desastre de Formosa.

46. La fuente reitera que al Sr. Hoá se le denegó el acceso a un abogado. Señala que las autoridades amenazaron al Sr. Hoá con tomar represalias si contrataba a un abogado y le dijeron que, sin representación letrada, recibiría una pena más leve si era declarado culpable. El Sr. Hoá recibió palizas brutales hasta que escribió cartas en las que confirmaba que no necesitaba un abogado. Las autoridades no informaron al Sr. Hoá que su familia había dado instrucciones a un bufete de abogados para que lo representara.

47. Según la fuente, la hermana y el primo del Sr. Hoá fueron las únicas personas autorizadas a asistir al juicio porque eran testigos de la defensa. La familia fue informada del juicio la tarde anterior a su inicio. Además, el Sr. Hoá fue sometido a tortura y malos tratos, y sigue teniendo contacto limitado con el mundo exterior. Puso fin a su huelga de hambre tras 12 días, pero desde entonces se halla en régimen de aislamiento.

Deliberaciones

48. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno por haber presentado la información en los plazos establecidos.

49. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Hoá es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que este desee refutar las alegaciones. La mera afirmación del Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no es suficiente para refutar las alegaciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

50. La fuente informa de que el Sr. Hoá fue detenido en la provincia de Hà Tĩnh el 11 de enero de 2017 y que, según tiene entendido, el Sr. Hoá no recibió una orden de detención ni una orden de ingreso en prisión en el momento de su detención. En su respuesta, el Gobierno parece reconocer que no hubo ninguna orden de detención, al señalar que el Sr. Hoá se entregó voluntariamente en esa fecha y presentó una carta de confesión “en la que describió todos sus actos ilegales” a la Policía de la provincia de Hà Tĩnh. No obstante, a lo largo de su respuesta, el Gobierno se refiere a la “detención” del Sr. Hoá. Según el Gobierno, “la detención y el juicio” del Sr. Hoá se realizaron conforme a derecho. La decisión de iniciar un proceso penal contra el Sr. Hoá, la orden de ingreso en prisión y la decisión de prorrogar el período de detención tuvieron origen en las autoridades competentes y fueron aprobadas por la Fiscalía Popular.

51. Habiendo examinado las comunicaciones de ambas partes, el Grupo de Trabajo considera que la versión de los hechos presentada por la fuente es la más creíble. Según la fuente, la familia del Sr. Hoá no fue informada de su detención y lo buscó durante días. El 17 de enero dirigió sendas cartas a los Departamentos de Policía de Kỳ Anh y Xã Kỳ Khang en las que les comunicaba que el Sr. Hoá había desaparecido ocho días antes y les pedía que investigaran su desaparición¹³. El Grupo de Trabajo considera que, si el Sr. Hoá hubiera tenido la intención de entregarse por propia voluntad a las autoridades, la familia probablemente lo habría sabido. En cambio, estaba tan convencida de que el Sr. Hoá había desaparecido que tomó la medida extraordinaria de publicar un anuncio sobre su desaparición. Además, el Grupo de Trabajo observa que otros activistas de los derechos humanos y de las cuestiones ambientales, entre ellos algunos que han sido objeto de opiniones anteriores, fueron detenidos aproximadamente en la misma época que el Sr. Hoá¹⁴, en lo que parece ser un esfuerzo concertado de las autoridades para disuadir y castigar la acción ciudadana pacífica. Por último, el Grupo de Trabajo ha determinado que, en varios casos, no se presentó ninguna orden en el momento de la detención, lo que parece indicar que las denuncias de la fuente son creíbles y que este caso es parte de un patrón de incumplimiento de los procedimientos de detención¹⁵. Por consiguiente, el Grupo de

¹³ La fuente suministró una traducción de la carta de la familia del Sr. Hoá fechada el 17 de enero de 2017, en la cual la familia informaba que había publicado un anuncio sobre la desaparición del Sr. Hoá.

¹⁴ Véase la nota de pie de página núm. 1.

¹⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 9/2019, párr. 29; núm. 8/2019, párr. 49; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 45/2018, párr. 40; núm. 36/2018, párr. 39; núm. 35/2018, párr. 26, y núm. 75/2017, párr. 35.

Trabajo considera que el Sr. Hoá fue detenido el 11 de enero de 2017 y que no se presentó una orden de detención en esa oportunidad.

52. Conforme al artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. En este caso, el Sr. Hoá fue detenido sin una orden de detención. Para que una privación de la libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento y aplicarlo a las circunstancias del caso a través de una orden de detención¹⁶.

53. Asimismo, de la respuesta del Gobierno se desprende que el Sr. Hoá no fue llevado sin demora ante un tribunal para impugnar la legalidad de su detención. El Gobierno afirma que el Organismo de Seguridad e Investigación dictó decisiones sobre la detención temporal inicial del Sr. Hoá el 11 de enero de 2017; sobre las dos prórrogas de tres días de la detención temporal los días 14 y 17 de enero, respectivamente, y sobre la detención durante tres meses a partir del 20 de enero. Si bien el Gobierno señala que esas decisiones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de la provincia de Hà Tĩnh, el Grupo de Trabajo considera que la Fiscalía no es una autoridad judicial independiente¹⁷. A juzgar por lo antedicho, el Sr. Hoá fue retenido durante al menos diez días, del 11 al 20 de enero de 2017, sin haber comparecido ante un tribunal. Este período sin revisión judicial probablemente se prolongó por más de diez días, ya que las partes no hacen referencia a que se hubiera celebrado alguna audiencia antes del juicio del Sr. Hoá que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2017. Según el Comité de Derechos Humanos, normalmente un plazo de 48 horas es suficiente para poner a alguien a disposición judicial, y todo período de más de 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas¹⁸. El Gobierno no presentó ninguna justificación. El Grupo de Trabajo considera que al Sr. Hoá no se le hizo comparecer sin demora ante una autoridad judicial, lo que trasgrede lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

54. Además, la fuente alega que el Sr. Hoá estuvo encarcelado en régimen de incomunicación en el centro de detención de Tĩnh Hà durante aproximadamente dos meses después de su detención. El Gobierno no niega esta acusación¹⁹. Como sostiene sistemáticamente el Grupo de Trabajo, la reclusión en régimen de incomunicación atenta contra el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, que se reconoce en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto²⁰. La supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal (A/HRC/30/37, párr. 3) y resulta esencial para garantizar que la reclusión tenga fundamento jurídico. Habida cuenta de que el Sr. Hoá no tuvo posibilidad de impugnar su detención, se ha vulnerado el derecho a un recurso efectivo que se reconoce en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

55. Por último, el Grupo de Trabajo considera que los cargos por los que el Sr. Hoá fue detenido en un principio y fue finalmente condenado son tan vagos y de carácter tan general que es imposible invocar un fundamento jurídico para su privación de libertad. El Sr. Hoá fue inicialmente acusado de “abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones y ciudadanos”, conforme al artículo 258 del Código Penal, y posteriormente fue condenado por “realizar actividades de propaganda contra el Estado”, de acuerdo con el artículo 88 del mismo Código. El Grupo de Trabajo ha planteado al Gobierno, en varias ocasiones, la cuestión del

¹⁶ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2018, párr. 48, y núm. 36/2018, párr. 40. Véanse también las opiniones núm. 75/2017 y núm. 46/2017.

¹⁷ E/CN.4/1995/31/Add.4, párr. 57 c). Véanse también las opiniones núm. 46/2018, párr. 50; núm. 35/2018, párr. 37, y núm. 75/2017, párr. 48.

¹⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014) sobre libertad y seguridad personales, párr. 33.

¹⁹ La lista de visitas familiares que el Gobierno proporcionó se refiere solo a los años 2018 y 2019, y no abarca el período inmediatamente posterior a la detención del Sr. Hoá, que tuvo lugar a principios de 2017.

²⁰ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2017 y núm. 45/2017.

enjuiciamiento con arreglo a leyes penales vagas y excesivamente amplias²¹. Además, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente para que una persona pueda acceder a la ley y comprenderla, a fin de regular su conducta en consonancia con ella²². Los artículos 88 y 258 del Código Penal de Viet Nam²³ no se ajusten a esa norma. El Sr. Hoá no podía haber previsto que dar a publicidad vídeos de las protestas tras el desastre de Formosa y ayudar a las personas afectadas a obtener indemnización constituiría una conducta delictiva.

56. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no estableció fundamentos jurídicos para la detención y el encarcelamiento del Sr. Hoá. Su privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

57. Además, la fuente alega que el Sr. Hoá ha sido privado de su libertad por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de opinión y de expresión, reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto, así como su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25 a), del Pacto. El Gobierno afirma que el Sr. Hoá fue encarcelado por violar la ley.

58. El Sr. Hoá fue condenado por “realizar actividades de propaganda contra el Estado”, con arreglo al artículo 88 del Código Penal. Este artículo establece una pena de 3 a 12 años de cárcel para toda persona culpable de: a) realizar propaganda contra el Gobierno popular, distorsionar información relativa al Gobierno o difamarlo; b) recurrir a la guerra psicológica y difundir noticias falsas a fin de fomentar la confusión entre la población, o c) elaborar, almacenar o distribuir documentos o productos culturales con contenidos contra el Estado. Las personas declaradas culpables de los delitos de propaganda más graves pueden ser castigadas con penas de 10 a 20 años de cárcel.

59. El Grupo de Trabajo ha examinado la aplicación del artículo 88 en numerosas opiniones relativas a Viet Nam y ha determinado que las condenas con arreglo a esta disposición por el ejercicio pacífico de los derechos no pueden considerarse compatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto²⁴. Llegó a una conclusión similar durante su visita a Viet Nam en octubre de 1994, cuando observó que, al invocarse delitos vagos e imprecisos contra la seguridad nacional, no se distinguía entre los actos violentos que pueden poner en peligro la seguridad nacional y el ejercicio pacífico del derecho a las libertades de opinión y de expresión (E/CN.4/1995/31/Add.4, párrs. 58 a 60).

60. En el presente caso, la fuente sostiene que el Sr. Hoá fue condenado en virtud del artículo 88 para castigarlo por su cobertura de las manifestaciones que siguieron al desastre de Formosa y de la respuesta del Gobierno al desastre. Según la fuente, la detención del Sr. Hoá no solo lo silenció a él, sino que tuvo efecto disuasivo para que otros desistieran de pronunciarse contra el Estado. En su respuesta, el Gobierno se refiere a los actos delictivos presuntamente cometidos por el Sr. Hoá entre 2013 y 2017, los cuales, según afirma el

²¹ Opiniones núm. 9/2019, párr. 39; núm. 46/2018, párr. 62; núm. 36/2018, párr. 51; núm. 35/2018, párr. 36, núm. 79/2017, párr. 54; núm. 40/2016, párr. 36; núm. 45/2015, párr. 15; núm. 20/2003, párr. 19; núm. 13/1999, párr. 12; núm. 27/1998, párr. 9, y núm. 21/1997, párr. 6. En relación con el artículo 258 del Código Penal, véanse las opiniones núm. 45/2018, párr. 54; núm. 24/2011, párr. 24, y núm. 1/2009, párr. 38. Con respecto al artículo 88 del Código Penal, véanse las opiniones núm. 75/2017, párr. 40; núm. 27/2017, párr. 35; núm. 26/2017, párr. 51; núm. 26/2013, párr. 68, y núm. 27/2012, párr. 41.

²² Véase, por ejemplo, la opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véase también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59, y la observación general núm. 35, párr. 22, del Comité de Derechos Humanos.

²³ Según la fuente, el 20 de junio de 2017 la Asamblea Nacional de Viet Nam aprobó una versión revisada del Código Penal, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Se modificó la numeración de los artículos 88 y 258, que continuaron vigentes como artículos 117 y 331, respectivamente. No obstante, las disposiciones anteriores se aplicaban al caso del Sr. Hoá, dado que él fue procesado antes de la entrada en vigor del Código revisado.

²⁴ Véanse las opiniones núm. 8/2019, núm. 75/2017, núm. 27/2017, núm. 26/2017, núm. 26/2013, núm. 27/2012, núm. 24/2011, núm. 6/2010, núm. 1/2009 y núm. 1/2003. Véanse también A/HRC/41/7, párrs. 38.73, 38.171 y 38.188, y ACNUDH, “Comunicado de prensa sobre Viet Nam y Venezuela”, 28 de julio de 2017.

Gobierno, están enunciados en una carta de confesión que el Sr. Hoá escribió después de entregarse voluntariamente a las autoridades. Esos actos son los siguientes: a) crear cuentas en medios sociales para conectarse e intercambiar información con otros activistas; b) compartir en las redes sociales mensajes, vídeos e imágenes que distorsionaban la verdad, incitaban a alterar el orden público, convocaban a reuniones ilegales y difamaban al Estado; y c) reunir información y grabar vídeos sobre reuniones en la zona afectada por el desastre, y difundirlos en los medios sociales con el objetivo de incitar a las personas a alterar el orden público y tergiversar la información sobre las políticas del Estado.

61. El Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 19, párrafo 2, del Pacto dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Este derecho abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo²⁵. Ampara la defensa y la expresión de opiniones, incluidas las que son críticas de la política oficial de un Gobierno o no se ajustan a ella²⁶. El Grupo de Trabajo considera que la conducta del Sr. Hoá está comprendida en el ámbito del derecho a la libertad de opinión y de expresión protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto. Asimismo, estima que el Sr. Hoá desarrolló actividades de promoción relacionadas con las políticas ambientales del Gobierno de Viet Nam y fue detenido por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos previsto en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 a) del Pacto²⁷.

62. Nada indica que las restricciones permisibles a esos derechos enunciados en los artículos 19, párrafo 3, y 25 del Pacto se apliquen al presente caso. Si bien el Gobierno se refirió al artículo 19, párrafo 3, no explicó por qué razón era necesario enjuiciar al Sr. Hoá para proteger un interés legítimo en virtud de este artículo, ni por qué el fallo condenatorio y la pena impuesta al Sr. Hoá fueron una respuesta proporcionada a sus actividades. En cualquier caso, el Consejo de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19, párrafo 3, que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos²⁸. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

63. De conformidad con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, y a señalar a la atención del público la observancia de los derechos humanos²⁹. La fuente ha demostrado que el Sr. Hoá fue detenido por ejercer sus derechos

²⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 11.

²⁶ Opiniones núm. 8/2019, párr. 55, y núm. 79/2017, párr. 55.

²⁷ Según el Comité de Derechos Humanos, los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate público. Véanse también la observación general núm. 25, párr. 8, del Comité de Derechos Humanos y las opiniones núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 40/2016, núm. 26/2013, núm. 42/2012, núm. 46/2011 y núm. 13/2007.

²⁸ Véase la resolución del Consejo de Derechos Humanos 12/16, párr. 5 p), en la que el Consejo exhortó a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones que no sean compatibles con el artículo 19, párr. 3, del Pacto, en particular sobre la discusión de políticas del Gobierno y el debate político, y sobre la información acerca de los derechos humanos, las actividades del Gobierno y la corrupción en el Gobierno.

²⁹ Véanse los artículos 1 y 6 c), de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (resolución 53/144 de la Asamblea General, anexo). Véase también la resolución 70/161 de la Asamblea General, párr. 8, en que la Asamblea exhortó a los Estados a que adopten medidas concretas para prevenir y erradicar la práctica de la detención y el encarcelamiento arbitrarios de los defensores de los derechos humanos e instó firmemente a la

en virtud de la Declaración como defensor de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo ha determinado que detener a una persona por sus actividades como defensora de los derechos humanos constituye una violación de su derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley en virtud del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto³⁰.

64. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la privación de libertad del Sr. Hoá se derivó del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y a participar en la dirección de los asuntos públicos, e infringió lo dispuesto en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto. Su privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría II.

65. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Hoá es arbitraria y queda comprendida en la categoría II, el Grupo de Trabajo subraya que el Sr. Hoá no debería haber sido sometido a juicio. Sin embargo, fue juzgado, declarado culpable y condenado el 27 de noviembre de 2017. La información presentada por la fuente revela que se produjeron violaciones del derecho del Sr. Hoá a un juicio imparcial durante el proceso.

66. Según la fuente, el Sr. Hoá estuvo detenido durante más de diez meses, desde su arresto, el 11 de enero de 2017, hasta su juicio, el 27 de noviembre de 2017. De conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la detención en espera de juicio debe ser la excepción y no la regla, y debe ser lo más breve posible. En el presente caso, no parece haberse llevado a cabo un examen individualizado de la situación del Sr. Hoá ni una evaluación de alternativas a la prisión preventiva, deficiencia que constituye una violación del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. La prisión preventiva no se ajustó a las normas de procedimiento ni fue debidamente revisada, y tampoco se respetaron sus derechos desde el momento de la detención hasta el pronunciamiento de la sentencia en primera instancia³¹. Como se señaló anteriormente, si bien el Organismo de Seguridad e Investigación prorrogó la detención del Sr. Hoá los días 14, 17 y 20 de enero de 2017, no hubo supervisión judicial independiente del caso. Si no pudo ser juzgado en un plazo razonable, el Sr. Hoá tenía derecho a la excarcelación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

67. Además, la fuente alega que el Sr. Hoá estuvo en prisión preventiva en régimen de incomunicación durante aproximadamente dos meses, lo que implica que no pudo impugnar su detención y, por lo tanto, fue sustraído de la protección de la ley. Esto infringe su derecho a ser reconocido como personas ante la ley consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto. Según la Asamblea General, la detención prolongada en régimen de incomunicación puede facilitar la comisión de actos de tortura y otros malos tratos, y puede constituir de por sí una forma de tales tratos³².

68. Asimismo, la fuente alega que el Sr. Hoá sufrió graves abusos en los centros de detención; por ejemplo, fue obligado a declarar contra otro activista. Durante el juicio, el Sr. Hoá se retractó ante el juez y afirmó que su declaración había sido obtenida bajo tortura. Por ello, recibió palizas brutales y, al parecer, es sometido a presiones para que coopere en otros casos. El Gobierno afirma que el Sr. Hoá nunca ha sido objeto de tortura ni malos tratos durante su reclusión, pero no proporciona ninguna información en apoyo de esta alegación. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que el Sr. Hoá ha sido objeto de torturas y malos tratos, lo que infringe la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa del derecho internacional, y el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto y los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura. Por lo tanto, remite este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

liberación de las personas detenidas o encarceladas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales.

³⁰ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017 y núm. 75/2017.

³¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 37.

³² Resolución 68/156 de la Asamblea General, párr. 27.

69. La fuente afirma además que, en abril de 2017, las autoridades dieron a conocer un vídeo donde el Sr. Hoá “se disculpaba” por haber informado sobre las protestas. La fuente alega que el Sr. Hoá no redactó el texto del vídeo, ya que las palabras de la confesión son casi un calco de las utilizadas en las grabaciones en vídeo de las confesiones de otros activistas. El Gobierno no responde directamente a esa alegación, pero afirma que el Sr. Hoá escribió una carta de confesión después de entregarse voluntariamente a las autoridades. El Grupo de Trabajo recuerda que incumbe al Gobierno demostrar que el Sr. Hoá prestó su declaración por propia voluntad, tanto en la grabación en vídeo como en la carta de confesión que presuntamente escribió, y no lo ha hecho³³. En cualquier caso, la difusión de ese vídeo antes del juicio del Sr. Hoá puso en entredicho su presunción de inocencia. Como resultado de ello, se conculcaron los derechos del Sr. Hoá a que se presuma su inocencia, consagrado en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto, y a no ser obligado a confesarse culpable, reconocido en el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto.

70. La fuente informa de que el juicio del Sr. Hoá duró apenas dos horas y media. El Gobierno no niega esta afirmación. Incluso si, como alega el Gobierno, el Sr. Hoá había escrito una carta de confesión, la audiencia no deja de ser muy breve. Tras el juicio, se le impuso la dura pena de siete años de cárcel y tres años de arresto domiciliario. Como el Grupo de Trabajo ha observado³⁴, un juicio breve por un delito grave parece indicar que la culpabilidad del Sr. Hoá y la pena correspondiente se habían determinado antes de la audiencia. El Grupo de Trabajo considera que este es un ejemplo más de la denegación, al Sr. Hoá, de su derecho a la presunción de inocencia garantizado en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

71. Además, la fuente alega que la Policía dijo al Sr. Hoá que no nombrara abogado, de modo que él quedó sin representación legal durante todo el procedimiento. No pudo consultar a un abogado inmediatamente después de su detención, mientras lo estaban investigando, con respecto a su prolongada prisión preventiva, a fin de prepararse debidamente para su juicio y para pedir asesoramiento sobre la interposición de un recurso de apelación. El Gobierno niega esta alegación y sostiene que el agente policial a cargo explicó al Sr. Hoá todos sus derechos, incluido el derecho a asistencia letrada. Señala que el Sr. Hoá se rehusó a contratar un abogado y escribió cinco cartas en las que indicaba que no quería los servicios de un abogado defensor, que sabía que había infringido la ley y que creía tener los conocimientos jurídicos suficientes como para defenderse a sí mismo. El Gobierno afirma que, en dos de esas cartas, el Sr. Hoá pidió que no se contratara a ningún abogado para representarlo, ni siquiera gratuitamente, y reiteró su deseo de no estar representado durante el juicio.

72. Habiendo examinado las comunicaciones de ambas partes, el Grupo de Trabajo considera que la versión de los hechos presentada por la fuente es la más creíble. Estima inverosímil que un bloguero de 24 años sin formación jurídica pudiera estar preparado para hacer frente a una acusación grave y a una prolongada pena de cárcel, cuando un bufete realizó múltiples intentos para representarlo e incluso se le ofreció representación gratuita. Además, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que, en varios casos, el acceso a la representación letrada se ha negado o limitado a personas que enfrentan graves acusaciones, lo que sugiere que existe un patrón sistémico que consiste en no facilitar el acceso a un abogado durante el proceso penal en Viet Nam³⁵.

73. El Grupo de Trabajo recuerda que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento durante su detención, en particular inmediatamente después de que esta se practique, y que ese

³³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 41.

³⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018 y núm. 75/2017.

³⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017, núm. 75/2017, núm. 27/2017, núm. 26/2017 y núm. 40/2016. Una afirmación similar de que un detenido había escrito una carta donde rechazaba la contratación de un abogado se formuló en otro caso (opinión núm. 46/2018, párr. 64).

acceso se debe facilitar sin demora³⁶. La falta de asistencia jurídica violó el derecho del Sr. Hoá a la igualdad de medios procesales y a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, enunciado en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Además, no se concedieron al Sr. Hoá los derechos que le confiere el Pacto en el artículo 14, párrafo 3 b), a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un abogado, y en el artículo 14, párrafo 3 d), a defenderse con la asistencia de un abogado de su elección. La falta de representación letrada también impidió que el Sr. Hoá ejerciera su derecho, previsto en el artículo 14, párrafo 5, del Pacto, a pedir una revisión del fallo condenatorio y de la pena.

74. Por último, la fuente alega que el contacto del Sr. Hoá con su familia ha sido limitado y señala que la familia fue notificada del juicio la tarde anterior a su inicio. Únicamente se autorizó a asistir a su hermana y su primo, en calidad de testigos de la defensa. Tras su condena, el Sr. Hoá fue trasladado a una prisión situada a unos 500 kilómetros de su ciudad de origen, y su familia no ha podido visitarlo regularmente. Durante las visitas, no se le permitió hablar acerca de su caso, su salud o las condiciones de su reclusión. El Gobierno confirma que el Sr. Hoá fue trasladado al centro de reclusión de An Diem en febrero de 2018. Sostiene que un gran número de personas, entre ellas representantes de los medios de comunicación, estuvieron presentes en el juicio del Sr. Hoá y que su hermana y su primo fueron invitados a asistir. Señala que el Sr. Hoá recibe visitas de familiares y puede llamarlos por teléfono. El Gobierno facilitó una lista de tales visitas y llamadas, pero no aportó ninguna prueba en apoyo de sus dichos ni negó que las visitas se realicen con restricciones.

75. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no ha refutado las alegaciones de la fuente. La limitación permanente del contacto del Sr. Hoá con su familia constituye una violación del derecho a mantener contacto con el mundo exterior, reconocido por la regla 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y los principios 15, 19 y 20 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

76. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que esas violaciones del derecho a un juicio imparcial revisten tal gravedad que confieren a la privación de libertad del Sr. Hoá el carácter arbitrario descrito en la categoría III.

77. Además, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Hoá fue perseguido por sus actividades como defensor de los derechos humanos, en particular por informar sobre el desastre de Formosa y por asistir a las familias que trataban de obtener una indemnización. La fuente alega, y el Gobierno no niega, que, poco después de su cobertura de las protestas tras el desastre, el Sr. Hoá fue golpeado por agentes policiales y su equipo fue confiscado. Asimismo, el Sr. Hoá fue condenado a siete años de cárcel y tres años de arresto domiciliario, pena desproporcionada para una persona que desarrollaba un activismo pacífico en su comunidad.

78. Como el Grupo de Trabajo ha observado, en Viet Nam parece haber una tendencia a detener a los defensores de los derechos humanos por su labor, incluidos los activistas que han intentado despertar conciencia acerca de la planta siderúrgica de Formosa. El Grupo de Trabajo ha extraído conclusiones al respecto en los últimos años³⁷ y considera que el presente caso es un ejemplo más de lo expuesto.

79. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Hoá fue privado de libertad por motivos de discriminación basada en su condición de defensor de los derechos humanos y en sus opiniones políticas o de otra índole que cuestionaban la actuación del Gobierno. Su privación de libertad constituye una violación de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y es

³⁶ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8.

³⁷ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 45/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017 y núm. 27/2017.

arbitraria conforme a la categoría V. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

80. Preocupa al Grupo de Trabajo la salud del Sr. Hoá, que al parecer es delicada. Según la fuente, el Sr. Hoá estuvo 12 días en huelga de hambre, a partir del 22 de febrero de 2019. El Gobierno afirma que el Sr. Hoá recibe tratamiento médico y goza de buena salud y que, aunque se rehusó a recibir las comidas proporcionadas por el centro de detención, consumió los alimentos que compraba en la cantina y le enviaba su familia. El Grupo de Trabajo recuerda las normas establecidas, entre otras, en las reglas 1, 24, 25, 27 y 42 de las Reglas Nelson Mandela. Habida cuenta de que el Sr. Hoá ha estado detenido durante más de 2,5 años, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones, y a garantizarle atención médica.

81. Este es uno de los varios casos presentados ante el Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la privación arbitraria de libertad, especialmente de defensores de los derechos humanos, en Viet Nam³⁸. El Grupo de Trabajo observa que muchos de esos casos siguen un patrón de detención similar que no se ajusta a las normas internacionales, caracterizado por la prolongada prisión preventiva sin acceso a revisión judicial; la denegación del acceso a la asistencia letrada; la detención en régimen de incomunicación; el enjuiciamiento, invocando delitos tipificados de forma imprecisa, por el ejercicio pacífico de los derechos humanos; un breve juicio a puerta cerrada, en el que no se observan las garantías procesales; la imposición de penas desproporcionadas, y la denegación de acceso al mundo exterior y a tratamiento médico. Preocupa al Grupo de Trabajo el hecho de que este patrón indica un problema sistémico con las detenciones arbitrarias en Viet Nam que, de continuar, pueden constituir una violación grave del derecho internacional³⁹.

82. El Grupo de Trabajo celebraría la oportunidad de trabajar de manera constructiva con el Gobierno para tratar la cuestión de la privación arbitraria de la libertad en Viet Nam. Ha transcurrido un tiempo considerable desde su última visita a Viet Nam, efectuada en octubre de 1994, y estima que este es el momento oportuno para realizar otra. El 11 de junio de 2018, el Grupo de Trabajo reiteró solicitudes de visita al país cursadas anteriormente al Gobierno y espera recibir una respuesta positiva. Dado que las prácticas de Viet Nam en materia de derechos humanos fueron examinadas durante el tercer ciclo del examen periódico universal en enero de 2019, el Gobierno podría aprovechar esta oportunidad para demostrar su voluntad de aceptar las recomendaciones formuladas fortaleciendo su cooperación con los procedimientos especiales del Consejo.

Decisión

83. En vista de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Nguyễn Văn Hoá es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 16, 19, 25 a), y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

84. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Hoá sin demora y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

85. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular el riesgo de daño a la salud del Sr. Hoá, el remedio adecuado sería poner de inmediato en libertad al Sr. Hoá y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

³⁸ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 45/2019, núm. 9/2019, núm. 8/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017, núm. 75/2017, núm. 27/2017, núm. 26/2017, núm. 40/2016, núm. 46/2015 y núm. 45/2015.

³⁹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2012, párr. 22.

86. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Hoá, incluidas las alegaciones de que fue torturado, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos

87. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que armonice su legislación, en particular los artículos 88 y 258 del Código Penal (ahora artículos 117 y 331 del Código revisado), con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos asumidos por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

88. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso: a) al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; b) al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y c) al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, para que tomen las medidas correspondientes.

89. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que incorpore la Ley Modelo para el Reconocimiento y la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en su legislación nacional, y la aplique⁴⁰.

90. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

91. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Hoá y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Hoá;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Hoá y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Viet Nam con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

92. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

93. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

⁴⁰ La Ley Modelo fue elaborada en consulta con más de 500 defensores de los derechos humanos de todo el mundo y 27 expertos en derechos humanos.

94. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴¹.

[Aprobada el 15 de agosto de 2019]

⁴¹ Resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.